



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**

**Derecho al trabajo y resocialización de los internos del Pabellón "B" del
Establecimiento Penitenciario de San Pedro. 2016-2017.**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADA**

AUTORA

Carmen Gisela Paredes Estela

ASESOR:

Santisteban Llontop Pedro Pablo

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Laboral

LIMA - PERÚ

2017

Nombre: Chávez Rodríguez, Elías Gilberto

Cargo: Presidente.

Nombre: Dávila Rojas, Oscar Melanio

Cargo: Secretario

Nombre: Santisteban Llontop, Pedro Pablo

Cargo: Vocal

Dedicatoria

A Dios, por guiar mis pasos, a mis padres y hermanos, por su apoyo constante en el camino de mi superación.

Agradecimiento

A los catedráticos de la Universidad César Vallejo, por saber guiarnos con sus enseñanzas y contribuir con sus conocimientos en mi formación como profesional.

Declaración de autenticidad

Carmen Gisela Paredes Estela, identificada con DNI N° 45189493, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, julio del 2017.

Carmen Gisela Paredes Estela

DNI N° 45189493

Presentación

Señores miembros del Jurado:

En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “Resocialización y los Derechos laborales Vulnerados de los internos del Penal San Pedro”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Abogado.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

La autora

ÍNDICE

	Página
Página del Jurado	ii
Agradecimiento	iii
Dedicatoria	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	x
Abstract	xi

I. INTRODUCCIÓN

Aproximación temática	2
Trabajos previos	5
Teorías relacionadas al tema	11
Formulación del problema	21
Justificación	22
Objetivos	24
Supuesto	25

II. MÉTODO

2.1. Tipo de investigación	28
2.2 Diseño de investigación	29
2.3. Caracterización de sujetos	29
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	30
2.5. Métodos de análisis de datos	32
2.6. Tratamiento de la información análisis temáticos	33

2.7. Aspectos éticos	34
III. RESULTADOS	
3.1. Descripción de resultados	36
IV. DISCUSIÓN	65
V. CONCLUSIONES	70
VI. RECOMENDACIONES	71
VII. REFERENCIAS	72
 ANEXOS	
 Anexo 1: Matriz de consistencia	 76
Anexo 2: Solicitud de validación de instrumentos	79
Anexos 3: Ficha de Validación de instrumentos	80
Anexo 4: Cuestionario de encuesta	82
Anexo 5: Guía de entrevistas	84

Índice de Tablas

	Página
Tabla 1: Principios del trabajo penitenciario	20
Tabla 2. Caracterización de sujetos	30
Tabla 3: Categorías	33
Tabla 4: Categorización	33
Tabla 5: Ficha Técnica de la entrevista	43
Tabla 6: Limitaciones y dificultades en el ejercicio del derecho al trabajo, organización y participación	45
Tabla 7: Recomendaciones de los entrevistados	47
Tabla 8: Ficha Técnica de las encuestas	49

Resumen

Esta investigación titulada Derecho al trabajo y resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro. 2016-2017, se ha planteado desde la preocupación y alarma ante el incremento de la delincuencia y la criminalidad en el país. Hoy en día la población vive atemorizada de ser víctima de algún delito. La inseguridad ciudadana es el problema mayor del país y la población tiene la percepción de que las autoridades no hacen lo suficiente.

Ante ese contexto, queremos llamar la atención de la situación carcelaria de las personas que están reclusas en el Penal de San Pedro, el más grande del país. Pues creemos que si el Estado resocializa de modo apropiado al interno, este ya no volverá a delinquir y no reincidirá en el delito. Una de las acciones o medio a realizar esta resocialización es el trabajo.

Estamos convencidos de lo importante que resulta para la persona estar trabajando pues eso no solo le otorga posibilidades y beneficios económicos para sí y para su familia, sino que ayuda a la persona a fortalecer su autoestima, generar capacidades positivas para sobrevivir y revertir su pasado delincuencial. Por ello esta investigación quiere aportar en analizar la problemática y las posibilidades que tiene el interno del Penal de San Pedro a partir del trabajo y el rol que le corresponde al Estado para cumplir con su deber de resocializar.

Palabras claves: Derecho al trabajo, resocialización, internos del Establecimiento Penitenciario de San Pedro.

Abstract

This research entitled Right to work and re-socialization of the inmates of Pavilion B of the Penitentiary Establishment of San Pedro. 2016-2017, has been raised from the concern and alarm to the increase of crime and crime in the country. Nowadays the population lives in fear of being a victim of any crime. Citizen insecurity is the biggest problem in the country and the population has the perception that the authorities do not do enough.

Against this background, we want to draw attention to the prison situation of the people who are being held in the San Pedro prison, the largest in the country. For we believe that if the State properly resocializes the inmate, he will no longer commit a crime and will not re-offend. One of the actions or means to carry out this re-socialization is the work.

We are convinced of how important it is for the person to be working because that not only gives him possibilities and economic benefits for himself and his family, but also helps the person to strengthen his self-esteem, generate positive skills to survive and reverse his criminal past . That is why this research wants to contribute to analyze the problematic and the possibilities that the prisoner of the San Pedro prison has from the work and the role that corresponds to the State to fulfill its duty to resocialize.

Key words: Right to work, re-socialization, inmates of the Penitentiary Establishment of San Pedro.

I. INTRODUCCIÓN

Aproximación temática

Se empezará la investigación contextualizando el escenario de estudio. Como se sabe la realidad penitenciaria siempre ha sido un tema preocupante de modo permanente y por tanto merece especial atención. La historia de la prisión como pena permite advertir que desde su institucionalización siempre fue un instrumento de afectación de algunos derechos de los internos que no han sido restringidos por mandato judicial (detención o sentencia condenatoria), y que difieren de la privación de la libertad. Las cárceles siempre han sido recintos sobre poblado, sin acceso a condiciones básicas de vida digna. Sin alimentación, salud, educación y trabajo adecuado, no es posible la resocialización.

En ese contexto, en el que el interno se encuentra alejado de los órganos jurisdiccionales, últimos garantes de sus derechos, se producen con relativa frecuencia las más increíbles afectaciones a sus derechos básicos, entre ellos, el trabajo. Consideramos que dichas prácticas penitenciarias atentatorias contra los derechos fundamentales de los internos deben desaparecer, básicamente porque son ajenas al principio de legalidad de la ejecución de la pena (contravención de las normas garantistas básicas de la debida ejecución penal); y porque califican negativamente al sistema penitenciario, aun, cuando éste opere de manera omisiva (administraciones penitenciarias que, no obstante conocer tales prácticas, no toman las medidas preventivas y correctivas del caso).

Respecto a la legislación nacional, se debe señalar que en el artículo 139º de la Constitución Política se encuentra como uno de los principios de la Administración de Justicia, el que los reclusos y sentenciados ocupen establecimientos adecuados así también que el régimen penitenciario tiene por objeto la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

En el artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654) encontramos “el objetivo de la Ejecución Penal”, que recoge el principio contenido en el inciso 22 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Los conceptos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, doctrinariamente, pueden resumirse en el de resocialización del interno. Este sector del sistema penal es el más estigmatizante y segregativo. Su finalidad es resocializar al delincuente e integrarlo a la sociedad como sujeto obediente a las normas y al orden establecido por el Estado. Se considera que tales fines resocializadores y reabilitantes “necesariamente son intensos, personalizados de gran perseverancia y buscan fortalecer la personalidad del condenado, otorgándole capacidades propias de acción y desarrollando un proceso paulatino de articulación con el medio libre.

Es bien sabido que el personal penitenciario tiene una responsabilidad trascendental: solucionar el levantamiento de motines, revueltas, toma de rehenes, evasiones, fugas, riñas en los interiores, etc. El personal penitenciario que observa estos acontecimientos no sólo debe limitarse a sancionar a los presidiarios a través de la coerción, flagelo, trato inhumano, impedirles el consumo de sus alimentos, etc. sino que debe hacer resaltar su verdadera función de penitenciarios: educar, culturizar, dialogar permanentemente, con cada uno de ellos: porque no hay personas incorregibles sino por corregirse.

En el Perú el tratamiento penitenciario es individualizado y grupal, este consiste en la utilización de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales, laborales y todos aquellos que permitan obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno. Además, el tratamiento se efectúa mediante el sistema progresivo. (Código de Ejecución Penal, Art. 6, y Art. IV del Título Preliminar).

Sin embargo, es el Reglamento de Organización y funciones del Instituto Nacional Penitenciario (Resolución Ministerial N° 040-2001-JUS), quien con

especialidad en su artículo 26º indica que la Oficina General de Tratamiento es el órgano encargado de formular y proponer la normatividad relacionada con el Tratamiento para la resocialización del interno, liberado y sentenciado a Penas Limitativas de derechos; así como de ejecutar las acciones de coordinación y supervisión para la correcta aplicación del tratamiento penitenciario, enumerando en su artículo 27º las funciones específicas que tiene este órgano con respecto al tratamiento adecuado e integral del Interno.

El Título III del Código de Ejecución Penal desarrolla las normas sobre el tratamiento penitenciario, que comprende lo concerniente al trabajo (art. 65º), educación (art. 69º), salud (art. 78º), asistencia psicológica (art. 92º), asistencia social (art. 83º) y asistencia legal (art. 87º).

Por su lado, la legislación penitenciaria peruana establece que el trabajo y la educación contribuyen decisivamente en el proceso de resocialización. Se concede especial importancia a la educación y se establece que en cada establecimiento penitenciario se propicie la educación del interno para su formación profesional o capacitación ocupacional.

El Título I del Código de Ejecución Penal peruano regula los derechos y deberes fundamentales del interno durante su permanencia en el establecimiento penitenciario para cumplir su pena o la medida privativa de libertad. Donde en aplicación de los artículos 3º y 9º aquel debe recibir una cartilla con las normas de vida que rigen en el Establecimiento Penitenciario, debiendo ocupar tal finalidad un ambiente adecuado, estando sujeto a tratamiento integral desde su ingreso hasta su liberación.

Las actividades y acciones, desarrolladas en este sentido, tienen como referente el carácter progresivo del proceso de reinserción social del interno y en su programación atiende las necesidades específicas de cada persona a quien se dirigen. En esta línea, la administración penitenciaria fomenta y desarrolla actividades deportivas, recreativas y culturales por parte de los

internos (Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, Decreto Supremo N° 518 de 19998, Arts. 92 al 95).

Mientras esto no ocurra se estará frente a la admisión de la construcción jurídica de un grupo de ciudadanos entre muros, con menores derechos que las personas en libertad. Ello es preocupante, pues pese a existir reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas desde 1955, en nuestra realidad penitenciaria ellas no se cumplen debidamente y el proceso de resocialización a partir del trabajo se echa por la borda. Esta investigación busca plantear alternativas para ello.

Trabajos previos

Antecedente internacional

En esta parte se presentó los antecedentes o trabajos realizados anteriormente en relación a la materia estudiada.

En la investigación del español De La Cuesta (2014) en su artículo *El trabajo de los internos en el derecho penitenciario español*, tiene la visión del trabajo del interno como un derecho y no como un deber, visión casi unánime de las doctrinas dominantes (p. 23). De la Cuesta plantea que el Estado debe promover, facilitar y estimular el trabajo entre los privados de su libertad a fin de que las cárceles dejen de ser espacios de gente perdida y sin salvación.

El mexicano Contreras (2014) en su estudio cualitativo titulado *Visión retrospectiva del discurso penitenciario en México* refiere a modo de recuento histórico que “Una vez pasado a la época post colonial, las cárceles en Latinoamérica empezaron a ser reformadas, es así que, en México, en el año 1814 se expide el primer reglamento para el funcionamiento de las cárceles de la ciudad de México, el cual fue reformado hasta el año 1820” (p. 128).

En la legislación chilena la administración penitenciaria desarrollaba sus actividades y acciones en la perspectiva de remover, anular o neutralizar los factores que han influido en la conducta delictiva y están dirigidas a las personas privadas de libertad o que se encuentran en el medio libre, cuando corresponda, a fin de prepararlas para que, por propia voluntad, participen en la convivencia social respetando las normas que la regulan. Normativa similar ocurre también en el Perú a través del Código de Ejecución Penal.

Como antecedentes se debe mencionar también a la Ley General Penitenciaria de España que fue una de las pioneras en establecer nuevos paradigmas para el tratamiento de la población penitenciaria, así lo establece: “las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados”. Por su lado, el artículo. 25,2 de la Constitución española establece: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”.

De otro lado, el trabajo cualitativo de Carvajal y Rojas, titulado *La resocialización y reinserción en el centro penitenciario de San Gil: un objetivo alcanzable a través de la reeducación* (2013) señalan que el régimen penitenciario y carcelario tiene como principio rector la resocialización para todas las personas que han alterado el sistema jurídico al cometer conductas punibles; por lo que esta norma se introduce en pro del respeto a los derechos de los reclusos dentro de las instituciones carcelarias. Serje, citado por Carvajal y Rojas, sostiene que “La resocialización supone un proceso de interacción y comunicación entre el individuo y la sociedad que no puede ser determinado unilateralmente ni por el individuo ni por la sociedad” (p. 127).

La base legal normativa a nivel internacional sobre la resocialización se encontró en primer orden a nivel internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que mediante su artículo 103º referido al

tratamiento del interno establece como finalidad su reforma y readaptación social. Esta norma internacional es el marco legal desde la cual los Estados que han suscrito el Pacto, entre ellos el Perú deben adecuar sus políticas y acciones desde ese marco legal orientativo y de obligatorio cumplimiento.

De otro lado, en relación a los privados de libertad, el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), permite el trabajo forzoso en las prisiones en la medida en que éste se imponga como consecuencia de una condena pronunciada por sentencia judicial y se realice bajo la vigilancia y el control de las autoridades públicas. Sin embargo, el Convenio N° 105, prohíbe el trabajo forzoso. Por ello los internos no podrán ser contratados por empresas privadas ni por particulares contra su voluntad, pero sí podrán aceptar un trabajo por cuenta de empresas privadas (por ejemplo, en talleres organizados en el interior de las prisiones) siempre que se realicen bajo la vigilancia adecuada del Estado. En virtud de lo mencionado todo aspecto relacionado al trabajo que realizan los privados de libertad debe respetar las consideraciones normativas antes reseñadas.

Desde la doctrina, para Guillamondegui en su estudio cualitativo titulado *Resocialización y Semilibertad. Análisis legal, jurisprudencial y criminológico* (2010, pp. 13-16) sostiene que la resocialización comprende el proceso que se inicia con la estancia del condenado en prisión, mediante el cual un equipo profesional, interdisciplinario, con la colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que éste pueda tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo pretérito y de sus implicancias personales, familiares y sociales presentes y futuras, con el propósito de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en sociedad respetando la ley penal en lo sucesivo. La resocialización, constituye además uno de los principios rectores de la ejecución de la pena por cuanto, junto con la legalidad ejecutiva, la judicialización y la inmediación, constituyen los pilares en los que se cimienta y orienta la actividad del Estado para la regulación y ejecución de la pena.

Antecedente nacional

El primer diagnóstico sobre la realidad penitenciaria también fue realizado por la Defensoría del Pueblo en el año 1997 en pleno proceso de dictadura donde se implantaron regímenes duros e inhumanos en las cárceles penales del país entre el año 2001 y 2008, donde resultaron heridos o muertos varios internos. A través de los motines, los internos plantearon públicamente sus reclamos a las autoridades con la esperanza de ser escuchados y de que sus pedidos sean atendidos. Los principales pedidos realizados por los internos fueron: la derogación de las leyes antiterroristas y las mejoras de las condiciones carcelarias. Así se aprecia que muchas veces existió coincidencia entre la realización de tales motines y el nombramiento de nuevas autoridades en el Ministerio de Justicia.

En el Perú, ha sido la Defensoría del Pueblo que en múltiples ocasiones ha revelado la situación carcelaria en el país, lo que se visibilizó a través del Informe Defensorial N° 29 en el que concluyó que existía un exceso de población penal y deficiencia en la infraestructura de los establecimientos penitenciarios. Asimismo en dicho informe se describieron las difíciles condiciones de reclusión en la que vivían los internos y las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas, producto de los duros regímenes penitenciarios implantados por la dictadura. Tal informe constituye el segundo diagnóstico que sobre el tema se realizó en nuestro país y su publicación tuvo lugar en el momento en que finalizaba la dictadura y se iniciaba en nuestro país un gobierno de transición a la democracia.

En otro Informe Defensorial N° 113, la Defensoría del Pueblo se señaló que la población penal estaba creciendo en una progresión geométrica y que el Estado no había hecho nada para atender tal incremento. Ello motivó que la Defensoría del Pueblo reconociera la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario del país, pues se estaba

produciendo una afectación permanente de los derechos fundamentales de los privados de libertad.

Por su lado, el Instituto Nacional Penitenciario (2014) señala que el trabajo penitenciario es de carácter voluntario, y si bien la ley establece que es un deber y un derecho, en la práctica, el trabajo que realizan los internos es voluntario e incluso podría decirse que de sobrevivencia ya que muchos internos trabajan dentro de los penales para poder mantenerse y mantener a sus familias. Cuando el interno se inscribe en determinado padrón poniendo de conocimiento a las autoridades pertinentes que se encuentran trabajando les podrá servir para redimir el tiempo de pena, ya se de dos días de trabajo por uno de condena o de siete días de trabajo por uno de condena.

Las formas o alternativas de trabajo que tienen los internos viene siendo desarrollados a través de determinados talleres creados por el Instituto Nacional Penitenciario, existiendo así mismo un mercado informal dentro de los establecimientos penitenciarios el cual ha generado un comercio interno de bienes y servicios.

Los talleres que se vienen implementando son de carpintería, zapatería, cerámica, telares, entre otros. En muchas ocasiones son los propios internos los que crean sus talleres de trabajo solicitando al instituto nacional penitenciario lo reconozca como tal. Estos talleres de trabajo tienen una utilidad diversa, sirve para rehabilitar al interno a razón de que sus fuerzas y capacidad se mantienen ocupadas y desarrollándose, sirve para que los internos aprendan un oficio que les podrá servir cuando salgan libres. En muchas ocasiones los beneficios que obtienen de su trabajo ayudan a solventar la economía de sus familias (p. 12).

En el 2012 el Instituto Nacional Penitenciario publica el *Plan estratégico Institucional para el periodo 2012-2016* en la que establece que en cuanto a

infraestructura penitenciaria para talleres de trabajo, hubo mejoras a través de la construcción de nuevos penales y la ampliación de algunos penales existentes.

No obstante, subsisten serios problemas de infraestructura a razón de los establecimientos penitenciarios antiguos, establecimientos en los que al momento de ser construidos no se había considerado dentro de sus diseños las áreas de talleres de trabajo, obligando a crear talleres en áreas muchas veces no adecuada para este tipo de actividades.

A diciembre del 2011, la administración penitenciaria había brindado actividades laborales a 19,751 internos, los que constituían el 37% de la población nacional. El hacinamiento en muchos establecimientos penitenciarios impedía que un gran porcentaje de internos acceda a talleres de trabajo (pp. 21-22).

La pregunta que surge es ¿qué tan efectiva ha sido el Plan Estratégico del INPE en relación a la promoción del trabajo de los internos? En esta investigación se responde a esta y otras inquietudes.

De acuerdo al Informe cuantitativo del Ministerio de Justicia (2014) señala que en el 2007 el Instituto Nacional Penitenciario publicó el diseño de políticas penitenciarias, dentro del cual, en el capítulo dedicado al tratamiento penitenciario, se publicó un cuadro estadístico sobre las actividades laborales que realizaban los internos. Esta estadística demostraba que el 63.6% de los internos, no trabajaba formalmente. Señalaba que al existir un nexo entre tratamiento y seguridad; si existía un buen sistema de tratamiento, se controlaba mejor a los internos, resocializándolos, disminuyendo de esa manera las amenazas de motines y reyertas. Por tanto, el tener dentro de los establecimientos penitenciarios actividades productivas generaba un nivel de rehabilitación más óptimo.

Otro antecedente nacional es el estudio de enfoque mixto de Meza, titulado *El trabajo penitenciario en el Perú la aplicación del trabajo como actividad obligatoria en la ejecución de la pena privativa de la libertad*, Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Derecho con Mención en Derecho Penal ante la Pontificia Universidad Católica del Perú (2016, p. 94).

El autor llega a las siguientes conclusiones:

- 1) el trabajo como una de las actividades esenciales que sustentan el tratamiento penitenciario, es tomado en cuenta por la amplia mayoría de países, diferenciándose entre unos y otros, el carácter obligatorio o no, en su aplicación.
- 2) Determinados países siguiendo una línea doctrinal predominante toman al trabajo como una actividad de libre elección, por considerar que dentro del tratamiento penitenciario todas las actividades que pueda realizar el condenado son de su libre elegir, ello partiendo del punto de que a ninguna persona se le puede obligar a cambiar, a readaptarse, a resocializarse, que ello depende de cada individuo; ir contra la voluntad del condenado sería vulnerar su libertad y transgredir su dignidad.
- 3) Otro Grupo minoritario parte de la premisa que la obligatoriedad en las actividades laborales dentro del tratamiento penitenciario son válidas, partiendo de la premisa de que, el trabajo es una actividad necesaria para la resocialización del condenado.

Teorías relacionadas al tema

Para dar un marco de inicio al presente trabajo, se empezará por analizar cuáles han sido las distintas concepciones sobre el sistema penal, el delito y la delincuencia y el trabajo. Comenzaremos por preguntarnos ¿Que es la cárcel? ¿Cuál ha sido y es su finalidad?

La cárcel

Desde una definición contemporánea se puede definir a una prisión o cárcel como un establecimiento donde son confinadas las personas detenidas por el sistema de seguridad y penal del Estado, ya sea para el cumplimiento de un proceso o una condena. Es un lugar de reclusión que aloja a quienes han sido investigados, acusados o condenados por el sistema judicial por transgredir normas legales cometiendo algún tipo de delito.

A lo largo de la historia, la cárcel no siempre ha tenido la misma finalidad, ha ido mutando de un simple medio de retención para el que esperaba una condena, a ser el espacio donde se cumple efectivamente con la condena. Este viraje se produce con el advenimiento del Estado moderno desde la segunda mitad del SXVIII y la primera del SXIX, donde el que ha cometido un delito ya no pagaría con una pena basada en la ley del Talión (ojo por ojo), física o con su vida, sino que se le impone un tiempo de castigo o encierro para que medite de acuerdo a una clasificación tipológica del delito.

Pavarini (1979, p. 121) sostiene que la cárcel es siempre ajena toda potencialidad resocializadora y que la alternativa actual está entre su “muerte” (abolición) y su “resurrección” como aparato de terror represivo. Hasta ese momento, la cárcel estaba reservada para los procesados y los que esperaban las ejecuciones de sentencia (castigo, ejecución o desestimación), pero como pena era utilizada únicamente para los infractores de menor cuantía y deudores y ni siquiera era utilizada en todos los casos, pues funcionaba también la pena de azotes.

Pavarini recuerda que los prisioneros permanecían retenidos en un mismo espacio, sin consideración a su delito y sus familiares debían pagar por su manutención. La aplicación de la justicia de la época era de dominio público, se mostraban los suplicios a los que eran sometidos los acusados así como

las ejecuciones de los mismos, entendiendo que este cínico show amedrentaba a quienes pudieran cometer un delito (1979, p. 129).

De otro lado, Goffman (1978, p. 129) termina por definir a las cárceles como lugares de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente o bien conviven bajo una disciplina impuesta con el objeto de que no fueran del todo inútiles a la nueva sociedad.

Zaffaroni (2007, p. 89) extiende el análisis de los instrumentos utilizados en la cárcel a otros ámbitos de la vida social y sostiene que el mecanismo de aislamiento es el mismo que opera en la persecución a las actividades sindicales, y en general a todas aquellas que implican la reunión de personas en pos de intereses comunes.

La resocialización

Respecto a la resocialización, Muñoz (1979, p. 94), señala que la resocialización supone un proceso de interacción y comunicación entre el individuo y la sociedad que no puede ser determinado unilateralmente, ni por el individuo ni por la sociedad. El individuo no puede, en efecto, determinar unilateralmente un proceso de interacción social, porque por la propia naturaleza de sus condicionamientos sociales está obligado al intercambio y a la comunicación con sus semejantes, es decir, a la convivencia.

Pero tampoco las normas sociales pueden determinar unilateralmente el proceso interactivo sin contar con la voluntad del individuo afectado por ese proceso, porque las normas sociales no son algo inmutable y permanente, sino el resultado de una correlación de fuerzas sometidas a influencias mutables. En otras palabras :resocializar al delincuente sin cuestionar al mismo tiempo el conjunto social normativo al que se pretende incorporarlo,

significa pura y simplemente aceptar como perfecto el orden social vigente sin cuestionar ninguna de sus estructuras, ni siquiera aquellas más directamente relacionadas con el delito cometido.

Muñoz (1979, pp. 94-95) insiste en afirmar que la resocialización, por tanto, sólo es posible cuando el individuo a resocializar y el encargado de resocializarlo tienen o aceptan el mismo fundamento moral que la norma social de referencia. Una resocialización sin esa coincidencia básica es puro sometimiento, dominio de unos sobre otros y una lesión grave de la libre autonomía individual.

Para Baratta (1990, p. 75) la reintegración social del condenado no puede perseguirse por medio de la pena carcelaria, sino que debe perseguirse a pesar de ella, ósea buscando hacer menos negativas las condiciones de vida en la prisión. Para una política de reintegración social, el objetivo inmediato no es solamente encarcelar a los que más se pueda.

Para García y De Molina “El paradigma re socializador destaca, además, por su realismo. No le interesan los fines ideales de la pena, ni el delincuente abstracto, sino el impacto real del castigo, tal y como éste se cumple, en el penado concreto de nuestro tiempo; no la pena nominal que contemplan los Códigos, sino la que efectivamente se ejecuta en los actuales establecimientos penitenciarios”.

El paradigma resocializador propugna, por tanto, neutralizar en la medida de lo posible los efectos nocivos inherentes al castigo, a través de una mejora sustancial del régimen de cumplimiento y ejecución de éste; y, sobre todo, sugiere una intervención positiva en el penado que lejos de estigmatizarle con una marca indeleble le habilite para integrarse y participar el mismo en la sociedad, de forma digna y activa, sin traumas, limitaciones ni condicionamientos especiales.

Respecto al tratamiento penitenciario a veces es llamado también reeducación, resocialización o readaptación del delincuente, sin embargo

creemos que el termino tratamiento es un concepto más genérico que engloba las diversas formas de influencia para la resocialización del interno. Además la acepción que ese les da no es igual para los diversos especialistas que intervienen en este campo.

El derecho al trabajo

Las nociones sobre el trabajo y su importancia, carácter y condiciones requieren algunas precisiones. *Etimológicamente el termino Trabajo* proviene del “latín *tripalium*, que significaba tres palos. El tripalium era un instrumento de tortura, el cual estaba conformado por tres estacas. En este instrumento de tortura se acostumbraba a atar a los reos.

Para la Defensoría del Pueblo colombiana “El trabajo es una actividad que permite a los seres humanos producir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades personales y sociales, creando a la vez valores materiales y espirituales. Es comprendido no sólo como un medio de supervivencia sino también como una forma de adquirir bienestar, dado que permite el desarrollo personal y la aceptación e integración social” (2014, p. 13).

El trabajo penitenciario es el trabajo realizado por personas sentenciadas a pena privativa de libertad dentro de cualquier un recinto penitenciario o carcelario. Se distingue entre trabajo carcelario y penitenciario por la distinción significativa de ambos términos. El primero es realizado por los procesados y el segundo, por los sentenciados. Esta distinción es relevante para efectos laborales prácticos de distinguir quién tiene la obligación de trabajar y quien no (2014, p. 357). A través de la historia de nuestro país, el trabajo siempre ha sido usado dentro del sistema penitenciario como un mecanismo resocializador.

De La Cuesta se refiere al **trabajo penitenciario** señalando: “Que, el trabajo puede ser un importante medio de tratamiento penitenciario nadie lo duda; otra cosa es que, con carácter general, quepa asegurar su condición de

elemento fundamental del mismo. Superados los tiempos en que se entendía por tratamiento, en un sentido institucional el conjunto de prestaciones y actividades desarrolladas en prisión, se prefiere hoy un concepto más científico, clínico, terapéutico, de tratamiento configurado a partir del estudio científico del sujeto y consistente en la aplicación individualizada de métodos diversos de orden médico, biológico, psiquiátrico, con independencia de su posición central en el régimen de vida en prisión, sólo será realmente elemento fundamental de tratamiento cuando se presente como vía de superación de las carencias que hayan llevado al sujeto al hecho delictivo. El trabajo solo alcanzara la consideración de elemento fundamental de tratamiento, cuando así resulte de la formulación de un programa individualizado” (2014, p. 217).

Sobre la importancia del trabajo carcelario denominado también “ergoterapia” o “laborterapia”, esta es una de las medidas que mayor aplicación tiene y la que más tratadistas la propugnan como el tratamiento más eficaz para la readaptación del recluso. Sin embargo, no todos están conformes en considerarlo una forma de tratamiento penitenciario, tal es el parecer de López Rey y Arrojo para quien el trabajo no es si un procedimiento terapéutico, ya que constituye algo inherente al ser humano y que no puede ser por tanto un medio de tratamiento.

Kurczyn considera que el trabajo penitenciario es la actividad o conjunto de ellas que los sujetos privados de su libertad ejecutan dentro de los recintos de las cárceles, colonias penales, penitenciarias, presidios y establecimientos especiales donde deban cumplirse las penas privativas, conforme a los ordenamientos legales que correspondan. Incluso añadiremos la práctica laboral extra carcelaria, en los casos de ejecución total o parcial de la privación de la libertad en forma no institucional (2014, p. 362).

Haciendo un análisis de la legislación internacional, se cuenta con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Regla 65º) el cual establece que el tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad deber tener por objeto, en tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. La Regla 66 agrega que: “dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad”.

Debe entenderse que el derecho al trabajo para las personas privadas de libertad no se encuentra restringido en ningún aspecto salvo las limitaciones que devienen en inevitables debido al cumplimiento de la pena. En esa medida, también les asisten otros derechos que conforman el núcleo duro de ese derecho, como son:

Derecho a condiciones de trabajo dignas: Tiene dos componentes básicos: El salario y las condiciones y tiempo dedicado al empleo.

En relación al primero es evidente que constituye un elemento fundamental en las condiciones de empleo. Sin garantías a un salario digno se generan situaciones de discriminación y privación que resultan incompatibles con un Estado de derecho.

El Instituto Nacional Penitenciario en referencia a la aplicación del trabajo como parte del tratamiento resocializador señala que los periodos de ocio del interno vienen a resultar riesgosos, ya que pueden propiciar conductas inadecuadas incluso delictuosas, pudiendo también ser dañino para la salud mental. Por ello el trabajo es favorable para la rehabilitación y la salud mental del interno (2008, p. 80).

La importancia del trabajo en la pena privativa de libertad se centra en que es uno de los mecanismos pilares junto con la educación, que permite el

éxito del tratamiento penitenciario; además de ser un método de capacitación para el ejercicio de una actividad lícita útil al momento de que se recupere la libertad. Según González “Es un método eficaz para combatir lo que consideran como la principal causa de la delincuencia, la ociosidad” (2000, p. 224).

De otro lado, el nivel de hacinamiento crítico que viene alcanzando el sistema penitenciario nacional impide que un número mayor de internos acceda a las áreas de trabajo existentes, pues su capacidad instalada no puede satisfacer un nivel de demanda que aumenta significativamente.

Sobre la discriminación salarial y de condiciones de trabajo, en la supervisión se ha podido establecer que dentro de los establecimientos penitenciarios se desarrollan una serie de actividades laborales que pese a desenvolverse en similar forma que en libertad, merecen una remuneración ostensiblemente menor. Cuando se emplean internos, suele pensarse que por su condición deben recibir un salario menor al promedio, lo cual constituye un criterio que podría vulnerar el derecho de acceso al trabajo en igualdad de condiciones.

Las condiciones de trabajo deben garantizar la seguridad e higiene laboral. En modo alguno dichas labores pueden hacer peligrar la salud o integridad del interno. Por ende, las consideraciones del médico del penal deben ponderarse para evitar posibles afecciones a la salud.

Respecto a la distribución del producto del trabajo penitenciario, el producto del trabajo se distribuye de acuerdo al Reglamento del Código de Ejecución Penal en forma más benévola para el interno que las anteriores disposiciones, del siguiente modo:

Art. 43°- El producto del trabajo del condenado se distribuirá en la siguiente forma;

- a) 20% para indemnizar los daños causados por el delito conforme lo disponga la sentencia
- b) 35% para la prestación de alimentos a su familia según las prescripciones del Código Civil.
- c) 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento penal; y
- d) 20% para fomentar el fondo propio que se entregara a su salida.

Este artículo reemplaza, efectivamente, lo dispuesto en el artículo 79 del Código Penal. Hay algunas diferencias significativas que deben comentarse. El artículo en mención dispone que “El salario de los condenados a penas privativas de la libertad o el producto de su trabajo, se aplicara, etc.”.

El trabajo igualmente es considerado un procedimiento terapéutico en otras áreas, como en el caso del tratamiento de enfermedades mentales mediante la laborterapia. En resumen, conforme a la Penología contemporánea, este quehacer no solo puede ser considerado como un Derecho y una Obligación del recluso, sino también como un medio de tratamiento. Tal es el sentido de nuestra legislación penitenciaria vigente, cuando estipula que el trabajo es un Derecho y un Deber del interno., constituyendo un elemento fundamental del tratamiento (Art. 71 del Código de Ejecución Penal y el artículo 116 de su Reglamento).

Sobre las condiciones básicas del trabajo penitenciario, hoy en día se considera que el trabajo de los reclusos debe ser en lo posible semejante o reunir condiciones similares al trabajo libre, con las particularidades propias que le son inherentes. Estos principios o condiciones básicas han sido aceptados por las Naciones Unidas en sus reglas mínimas estipuladas en el año de 1995, y recogidos también por nuestra legislación penitenciaria. Dichas condiciones o principios básicos son:

Tabla 1: Principios del trabajo penitenciario

Principios	Descripción
El trabajo penitenciario no debe tener carácter aflictivo	Así lo recomiendan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas y el Código de Ejecución Penal que además agrega que no será aplicado como medida disciplinaria. Esto supone que el trabajo que se provea en los centros carcelarios no debe contener la idea de sufrimiento o castigo, porque sería contraproducente para la readaptación del interno, y originaria más bien rechazo por la actividad laboral.
No debe atentar contra la dignidad del recluso	Esto significa que no debe imponerse una actividad ocupacional que vaya contra la dignidad personal del interno, ni ser impuesta en contra de sus particularidades físicas, vocacionales, hábitos o formación laboral
Debe tender a proporcionar un oficio o profesión; o bien a aumentar su actual capacidad laboral	Partiendo del hecho que muchos delitos son productos de la falta de formación ocupacional del recluso que no le permite poder obtener su supervivencia en forma socializada, es importante que la institución penitenciaria le posibilite la ocasión de recibir una capacitación profesional en algún oficio según sus habilidades e intereses.
La organización y métodos del trabajo penitenciario deben ser similares al trabajo libre	Este principio se fundamenta en la necesidad de que la actividad laboral como medida contribuyente al tratamiento del recluso, sirva también para que al finalizar la fase de reclusión pueda estar apto para las condiciones normales del trabajo libre.
Debe estar dirigido preferentemente por la administración penitenciaria	Generalmente el trabajo es organizado por la entidad penitenciaria, pero también es posible que este financiado por instituciones o empresas privadas. Sin embargo en estos últimos casos, se recomienda que la dirección quede en manos de la administración carcelaria.

Debe proteger la salud y seguridad de los reclusos que trabajan	Los internos sometidos al trabajo penitenciario deberán gozar de los mismos beneficios del seguro social, otorgándoseles seguro por enfermedad y accidentes de trabajo en condiciones similares que las reconocidas a los trabajadores libre. El artículo 137 del Reglamento del Código de Ejecución Penal señala que en esos casos serán atendidos por el Estado conforme a las normas sobre la materia, reconociéndose también los casos de muerte producida por accidente o enfermedad profesional originada por el trabajo penitenciario.
Debe ser remunerado de forma equitativa	Generalmente se considera que la remuneración del trabajo penitenciario debe ser similar al del trabajo libre, estipulándose sin embargo que del salario respectivo se distribuya una parte para su familia, otra para gastos personales, para los gastos que ocasione al establecimiento y otra para cubrir la reparación civil.
La jornada de trabajo no debe exceder de las ocho horas diarias	Este tipo de actividad laboral no podrá ser mayor por día y también por semana, que la estipulada por la legislación laboral vigente. Además el artículo 140 del Reglamento del Código de Ejecución Penal señala que los internos gozaran de permisos y vacaciones laborales.

Luego de exponer los antecedentes, la aproximación temática y el Marco Teórico, a continuación se formulan los problemas de investigación.

Formulación del problema

Desde la definición metodológica, para Torres (como se citó en Alfaro, 2012, p.23) sostiene que se denomina problema de investigación al fenómeno que incide en una población cuya solución los beneficia. Son dificultades que debe superar el investigador a fin de conocer las relaciones intrínsecas del objeto de investigación. En ese sentido se formulan los siguientes problemas de investigación.

Problema General

¿De qué manera el derecho al trabajo aporta en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro?

Problema Específico 1

¿De qué manera la legislación nacional reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos?

Problema Específico 2

¿Cuál es la incidencia de la normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro?

Justificación del estudio

Desde los aportes metodológicos, Carrasco sostiene que todo trabajo o proyecto de investigación, necesariamente requiere ser justificado, es decir, debe explicar por qué se realiza. Responder a la pregunta por qué se investiga, constituye en esencia la justificación del estudio investigativo (2007, p. 117). Esta investigación ha considerado plantear una triple justificación: teórica, práctica y metodológica como a continuación se detalla.

Justificación Teórica

El presente trabajo de investigación se justifica por su relevancia jurídica, por su utilidad y su viabilidad. Es relevante puesto que en nuestra actualidad donde la vulneración de los Derechos Fundamentales de los internos se ven afectados, por lo mismo que no hay una supervisión adecuada y que se le brinde un trato igualitario y puedan tener acceso a sus beneficios penitenciarios y se les respete sus Derechos tal cual lo indica la Constitución y el Código de Ejecución Penal.

La Constitución Política señala como objetivo fundamental de la Ejecución Penal la resocialización del interno, la misma que será posible a través de la Reeducación, Rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad; que va de la mano con el principio de humanización de las penas.

Este objetivo está íntimamente ligado a la declaración constitucional del artículo primero, según el cual la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y siguiendo con el análisis constitucional, una persona al ser privada de su libertad pierde solamente los derechos que la condena señala, quedando a salvo los derechos señalados en el artículo segundo y los que como persona le corresponden.

La Carta Magna, específicamente en su artículo 139° inciso 21 y 22; establece el objetivo de la ejecución penal, la misma que debe ejecutarse teniendo siempre como norma el respeto a la dignidad humana.

Lo prescrito en dichos artículos pone a la legislación constitucional a la par de las legislaciones constitucionales del mundo.

Justificación Metodológica

Esta investigación es de enfoque cualitativo y se hará uso de las técnicas de recolección de datos más apropiadas: encuesta, entrevista, análisis de fuente documental y observación. El tipo de estudio será aplicada y el diseño fenomenológico. Además de contar con una trayectoria metodológica y guiarnos de las pautas de los principales metodólogos consultados (Hernández, Carrasco, Solís, Behar), además de lo establecido en el Reglamento de Investigación de la Universidad y de las pautas del asesor metodológico. Por tanto, la investigación queda justificada metodológicamente.

Justificación Práctica

La práctica el presente trabajo nace de la imperante injusticia que afronta una persona condenada y albergada en un centro penitenciario al ver que sus derechos fundamentales son vulnerados, y que las autoridades no hacen nada por dar solución a este problema. Los condenados necesitan reformas sobre el sistema penitenciario para que así todo aquel interno tenga acceso a los programas de trabajo, educación y así se evite el mayor grado de la reincidencia y puedan ser re socializados y aceptadas ante la sociedad como un nuevo individuo. Sin embargo se encuentran falencias en la práctica ya que en los penales la realidad es otra carecen de ciertos servicios que por ley y por la constitución se le debe dar hasta su cumplimiento de condena.

Objetivos

Según Behar los objetivos representan acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar responder a las preguntas de investigación y así resolver el problema de investigación. Se puede notar que todos los subtítulos hasta ahora señalados tienen una consistencia entre sí (coherencia interna), por ello, los objetivos deben ser concretos, claros, realistas y modestos, en la medida en que realmente reflejan la contundencia del investigador en su intención de aportar en el conocimiento del objeto de estudio (2008, p. 29). En la línea que marca Behar se plantean los siguientes objetivos.

Objetivo General

Determinar la manera en que el trabajo aporta en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro

Objetivos Específicos

Objetivo específico 1

Analizar la manera en que la legislación nacional reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos

Objetivo específico 2

Determinar la incidencia de la normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro

Supuestos jurídicos

En esta investigación se asume Supuesto como sinónimo de hipótesis. Para Muñoz (como citó en Bernal, 2010, p.136) una hipótesis es una explicación anticipada y provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o desaprobar, a través de los antecedentes que se recopilan sobre el problema de investigación previamente planteado. En este caso se plantean los siguientes Supuestos, los cuales han sido demostrados a lo largo de la investigación.

Supuesto general

El trabajo aporta de modo significativo en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro ya que adquieren capacidades y habilidades laborales que le permiten obtener recursos económicos y mejorar su calidad de vida.

Supuesto específico 1

La legislación nacional de modo explícito reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos, lo cual se constituye en exigible para que el INPE cumpla con dicha normativa.

Supuesto específico 2

La normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro tienen una incidencia e impacto poco significativo debido a que no cuentan con la logística, personal e infraestructura necesaria para ello.

II. MÉTODO

II. MÉTODO

Para la investigación ha sido fundamental asumir una trayectoria metodológica a partir de un método de estudio. Para Sánchez (1998) haciendo referencia a la investigación señala que los científicos son curiosos que desean saber cómo funciona el mundo y nada más. Encuentran problemas que resolverán gracias a las hipótesis que lancen y a las respuestas que les dé la naturaleza.

Esto significa que cuando se investiga se parte de problemas, de ahí que cualquier persona, que trabaje con actitud científica, debe saber reconocer cuándo su idea de investigación es un problema que merece solución. Los científicos no parten de la nada, pues sólo son problemas científicos aquellos que se encuentran dentro de un cuerpo de conocimientos disponible (p. 317).

2.1. Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación es de tipo aplicado. Esta es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad del fenómeno jurídico y social (en este caso el trabajo que realizan los internos del Establecimiento de San Pedro), el descubrimiento y desarrollo cuerpo organizado de conocimientos (Marco Teórico sobre derecho al trabajo y población penitenciaria)

La investigación aplicada (también llamada práctica o empírica) se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Se vincula con la investigación básica pues depende de los resultados y avances de esta última, esto queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico.

Será una investigación documental porque nos apoyaremos en fuentes de carácter documental. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística.

La primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como jurisprudencias acuerdos plenarios, resoluciones entre otros.

Será de campo porque para corroborar lo sostenido nos hemos desplazado al centro penitenciario San Pedro, así mismo se entrevistó a los funcionarios, técnicos y personal del Establecimiento, se encuestó a los internos y se recabó informes de las labores realizadas en dicho centro penitenciario.

2.2. Diseño de investigación

El diseño es el conjunto de estrategias procedimentales, metodológicas y técnicas, que regulan la formulación del problema, da respuestas y verifica o demuestra la hipótesis de tipo de investigación cualitativa. En palabras de Hernández el diseño de la investigación es el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación (2010, p. 120). Efectivamente, el diseño se refiere a una estrategia general, que tiene como objeto proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de un plan de trabajo que permita al investigador determinar las operaciones necesarias para hacerlo.

El diseño de la presente investigación se rige bajo un diseño fenomenológico - experimental, basado en estudio de hechos reales. Lo que se hace en la investigación experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.

2.3. Caracterización de sujetos

Con la finalidad de evaluar las variables citadas anteriormente se propone realizar un muestreo estratificado, toda vez que los indicadores de cada variable serían homogéneos, tomándose una muestra determinada para la

verificación de la hipótesis. En ese sentido las muestras a tomarse serán: un número de 50 internos del centro penitenciario San Pedro, con la finalidad de determinar los derechos laborales vulnerados de los internos. Esta encuesta se realizó mediante fichas de encuestas. Además se aplicó entrevistas a funcionarios del Establecimiento Penitenciario para tener un mejor análisis. Asimismo, se entrevistó a los expertos en la materia y al personal del INPE.

Tabla 2: Caracterización de sujetos

PERFIL ACADÉMICO		
Especialidad	Institución	Nivel profesional y académico
Derecho	INPE	Abogado
Educación	INPE- PNP	Educador
Psicología	INPE	Psicólogo especialista
Técnico	INPE	Técnico especialista
Sin especificar	Interno – persona privada de su libertad	Sin especificar

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Según Carrasco la recolección de datos son las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y son numerosas: observación, las escalas, la encuesta, entrevista y el cuestionario (2007, p. 282). Las técnicas empleadas permitieron ordenar de manera lógica y secuencial las etapas del proceso de investigación. Observar, recolectar, ordenar, graficar y conservar la información y los datos, y elaborar sistemas de clasificación y análisis de datos.

Utilizándose en el presente trabajo de investigación las siguientes técnicas:

- a. **Análisis de fuente documental:** libros especializados, informes, entre otros. Según Quintana (2006, p.19) el análisis documentario constituye el punto de entrada a la investigación e, incluso en muchas ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa. Revelar los intereses y las perspectivas de comprensión de la realidad, que caracterizan a los que han escrito los documentos. El análisis documental se desarrolla en cinco acciones: Rastrear e identificar los documentos existentes, seleccionar los más pertinentes, leer en profundidad su contenido para extraer elementos de análisis y leer en forma cruzada y comparativa los documentos para construir una síntesis de la realidad humana analizada.
- b. **Entrevistas:** El cuestionario (guía de preguntas) a aplicarse a internos del centro penitenciario, funcionarios. Según Tamayo (2007, p. 30) la entrevista es un diálogo intencional, una conversación personal que el entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener información.
- c. Análisis del marco normativo.
- d. Análisis de derecho comparado.
- e. **Encuesta** a internos. “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” (Casas, Repullo, Donado, 2002. 1).
- f. **Observación** del Establecimiento Penitenciario. Para Tamayo (2007, p. 29) la observación científica consiste en la percepción sistemática y dirigida a captar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y personas en el contexto donde se desarrollan normalmente. Proporciona la información empírica necesaria para plantear nuevos problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación.

Se usarán los siguientes **instrumentos**:

- a) Guía de entrevistas
- b) Cuestionario
- c) Ficha de análisis de normas

2.5. Métodos de análisis de datos

Dado que esta investigación es de enfoque cualitativo, que según Pérez (2002) la investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos (p. 118), se asume que en las investigaciones cualitativas, los datos se presentan en forma argumentativa y narrativa y se consideran dos niveles de complejidad:

Análisis descriptivos, que sirven para describir el comportamiento de una Categoría en una población o en el interior de su poblaciones y se limita a la utilización de los datos descriptivos.

Análisis inductivo, es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Fuentes expresan que este método originalmente puede ser asociado a estudios de Francis Bacon a inicios del siglo XVII. El método inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general. En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del comportamiento o la conducta de los objeto partiendo específicamente de la observación de casos particulares que se producen durante el experimento.

Análisis deductivo, es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.

Análisis exegético, es el estudio de las normas jurídicas civiles artículo por artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador.

Análisis ligados a los Supuestos: cada uno de los Supuestos formulados han sido objeto de verificación.

Asimismo, todo instrumento aplicado para la recolección de datos ha sido antes validado. La validación de Instrumento puede ser realizada con las siguientes técnicas:

- a) Validez de contenido. Puede utilizarse ccriterio de Jueces (por lo menos 3 expertos de la especialidad del tema de estudio).
- b) Validez de constructo, mediante la técnica de reducción factorial (cuando se trata de escalas de medición).
- c) Aplicación piloto en una pequeña muestra con el fin de verificar su consistencia conceptual y de comprensión de los sujetos de investigación.

2.6. Tratamiento de la información análisis temáticos

Tabla 3: Categorías

Tabla 4:	CATEGORÍAS
	(X) Derecho al trabajo
	(Y) Resocialización

Categorización

Categorías	Sub categorías
Resocialización	Interno, cambio de conducta, labores productivas, disminución de la violencia, adaptación social
Derecho al trabajo	Productos, talleres, ventas, ganancias económicas, inversión

Para esta investigación hacemos uso de las Categorías. De acuerdo a Gomes (2003, p.55) la palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo.

La información ha sido también sometida a la confiabilidad: la confiabilidad de los instrumentos se respalda en su originalidad en su elaboración y la respectiva aprobación de la ficha de validación de los instrumentos sometidos a juicio de expertos.

2.7. Aspectos éticos

Huamanchumo H. y Rodríguez J. (2015), Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los problemas sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio de la sociedad y de las organizaciones. Es decir deben estar orientados a identificar las causas de los problemas y dar una solución científica al problema a investigar. Ninguna investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales. (p.199).

La investigación realizada por la investigadora ha sido elaborada con el máximo valor axiológico que representa el seguimiento del respeto por las normativas a los derechos de autor, a las investigaciones realizadas por otros autores, así como a la objetividad en la realización y procesamiento de los resultados. Asimismo en las entrevistas se ha visto claramente objetividad por las respuestas entregadas que solo han servido para aumentar el conocimiento sobre la materia. Para los derechos de autor se debe acotar que se han usado las referencias del APA en su sexta edición en conjunción con la guía que ha entregado la universidad para la presentación de informes de tesis.

III. RESULTADOS

3.1. Descripción de resultados

3.1.1. Resultado del análisis de los Antecedentes

De los resultados del análisis de los antecedentes históricos de la cárcel como concepción y finalidad se aprecia que la cárcel ha cumplido diferentes finalidades, de acuerdo a la visión y comprensión que se tenía de ella. El Perú no ha sido ajeno a dicha visión y evolución. La cuestión que surge es: ¿los que ingresan a un Establecimiento Penitenciario evolucionan o involucionan como personas? ¿La cárcel está siendo el espacio y el lugar que les permite meditar, resocializarse y reeducarse? ¿El Estado está asumiendo su rol, obligación y responsabilidad sobre aquellos que “le fallaron” a la sociedad? Desde esta investigación se responde a esas cuestiones, los que están expresados en la discusión, conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Del análisis de los Antecedentes se coincide con De la Cuesta (España) cuando plantea, siguiendo la doctrina y el paradigma dominante del interno como sujeto de derecho y pasible de desarrollo de capacidades. En esta investigación desde la constatación in situ en el establecimiento de San Pedro, se ha corroborado que sí es posible la resocialización cuando las dos partes involucradas en ello lo creen: el Estado y el propio interno. Carbajal y Rojas también coinciden con esa perspectiva. Los internos del Establecimiento de San Pedro han dado señales positivas de que sí es posible la resocialización y que el trabajo ha sido un elemento clave para ello.

Desde México también se valora el trabajo de Contreras cuando refiere que desde la época colonial en los países de América Latina, entre ellos el Perú, las cárceles han estado en un permanente ciclo de crisis, reforma, crisis, reforma. Siendo el mundo penitenciario tan complejo, es comprensible este ciclo, al parecer inacabable. Ello sucede, en parte, a que la cárcel de algún modo expresa la situación y el proceso que siguen las sociedades y los

países. Crisis no supone necesariamente algo malo o negativo. Crisis supone oportunidad y peligro a la vez. Dependerá de cómo el Instituto Nacional Penitenciario asuma y enfrente la crisis y la situación crítica que se vive en el día a día en el Establecimiento de san Pedro, de modo particular en relación al derecho al trabajo de los internos. El derecho al trabajo debiera ser una oportunidad para resocializar y devolver la confianza en el interno.

3.1.2. Resultados del análisis de la legislación

Desde el análisis de la legislación nacional, cabe señalar que la legislación penitenciaria peruana adopta el planteamiento resocializador y la idea del tratamiento progresivo, a través de programas que deben ser brindados de manera individual o grupal por un equipo multidisciplinario de profesionales. En esta labor se debe contar con la participación del interno y su familia, con instituciones públicas o privadas, así como con la sociedad en general, tal como lo dispone el artículo 97º del Reglamento del Código de Ejecución Penal: El tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades encaminadas a lograr la modificación del comportamiento del interno, con el fin de resocializarlo y evitar la comisión de nuevos delitos”.

El Código de Ejecución Penal señala el destino de las utilidades producidas por el trabajo penitenciario. Una esmerada atención a estos objetivos y un análisis de los términos de este dispositivo es esencial para evitar los peligros de malversación. El único destino de estas utilidades es lo que mejora y hace más eficaz la producción penitenciaria, visto como tratamiento de readaptación. Las utilidades tienen necesariamente, que invertirse con estos fines y no pueden ser usadas para remunerar el trabajo o para suplir las deficiencias del establecimiento en sus otros departamentos. Los capitales producidas por esta fuente de trabajo constituyen una forma de auto inversión, cuyo fin es aumentar en todo lo posible la capacidad productiva del centro.

Así es que estas utilidades podrían aplicarse en la compra de maquinaria, en contratar al personal para hacer más eficiente la producción, en la compra de materia prima, y a todo lo relativo a los aspectos mercantiles. El objetivo de dichas inversiones debe ser la producción de la mayor ganancia posible proporcional a la suma invertida, sin entrar en especulaciones. El dinero debe invertirse a fin de auto capitalizar al establecimiento y suministrar el trabajo en forma estable y garantizada para todos los reclusos. Las utilidades que produzca el trabajo por la producción penitenciaria se aplicaran exclusivamente a su propio mejoramiento y acrecentamiento de su eficacia como medio del tratamiento de readaptación. (Artículo 41).

Sobre el trabajo penitenciario como derecho del interno, según este parecer todos los seres humanos tienen Derecho al Trabajo. Derecho que incluso es consagrado por el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, se debe aclarar que este principio muchas veces no pasa de ser una declaración lírica. En la realidad concreta de los países desarrollados y subdesarrollados, existe gran cantidad de desocupados que aspiran contar con un puesto de laboral y que no tienen en que trabajar incluso en nuestra Constitución Política del Perú, vigente se estipula como un “Derecho de toda persona el elegir y ejercer libremente su trabajo”. Pero en los hechos concretos queda como un derecho declarativo, no habiendo mecanismos que permitan al ciudadano hacer efectivo este derecho constitucional. Esta contradicción por supuesto, se hace más notoria en los centros carcelarios, por la falta de implementación de puestos de trabajo para toda la población de internos.

Desde el análisis de la legislación internacional cabe señalar las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas en Ginebra en 1955, resulta un instrumento jurídico internacional también a analizar. Este instrumento ratificado por el Perú establece los estándares mínimos en la que deben estar reclusas las personas privadas de su libertad, pero que de acuerdo a la observación in situ realizada en las instalaciones del

Establecimiento Penitenciario de San Pedro, estas no se cumplen por parte del INPE.

Del análisis de la legislación internacional cabe señalar también el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mismo que deja en claro que no se trata de obligar o forzar al interno a trabajar. El trabajo en las prisiones debe ser siempre voluntario. Al Estado le corresponderá promover, animar y estimular el trabajo dentro de las prisiones pero no imponerla ni forzarla. La doctrina, la legislación nacional y desde esta investigación también se asume la postura de la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo forzado en las cárceles queda proscrito y resulta condenable.

Del análisis de la legislación española sobre la gestión penitenciaria se observa que el Perú ha seguido el modelo español respecto a la finalidad del tratamiento penitenciario. Aun cuando el Perú y España guardan diferencias de todo tipo, ambos países buscan, por lo menos en la intención de la ley, recuperar, reinserir y resocializar al que ha transgredido a la ley a fin de recuperarlo y reincorporarlo a la sociedad. No se trata de condenarlo de por vida, se trata de salvarlo y reconocer que sigue siendo un sujeto de derechos, y uno de sus derechos fundamentales es el trabajo. Del análisis de la legislación chilena sobre administración penitenciaria y medio libre se ha observado que normativa similar ocurre también en el Perú a través del Código de Ejecución Penal.

3.1.3. Resultado del análisis de fuente documental

En esta parte se analizarán principalmente tres fuentes documentales: 1) Informe de la Defensoría del Pueblo, 2) Informe del Instituto Nacional Penitenciario, y 3) Informe del Ministerio de Justicia, los que se detallan a continuación.

3.1.3.1. Informe de la Defensoría del Pueblo: En el Perú ha sido la Defensoría del Pueblo una de las primera instituciones en estar atenta a la situación de los internos. Casi desde su creación uno de sus primeros informes defensoriales, en 1997 estuvo abocada a la situación penitenciaria. Incluso la Defensoría del Pueblo cuenta con un área denominada de Asuntos Penitenciarios, en la que hace seguimiento, análisis, supervisiones y recomendaciones al Instituto Nacional Penitenciario a fin de mejorar las condiciones de vida y laborales de los internos. En más de una ocasión ha supervisado y constatado la situación de los internos del establecimiento de san Pedro, más todavía que este es el establecimiento con mayor población en el país, y es el único cuya seguridad está a cargo de la Policía Nacional y no del personal del Instituto Nacional Penitenciario como ocurre en los demás Establecimientos Penitenciarios del país.

3.1.3.2. Informe del Instituto Nacional Penitenciario: Desde el 2012 el propio Instituto Nacional Penitenciario había reconocido la carencia de infraestructura, logística, personal y presupuesto para afrontar sus dificultades y retos. De ello se podría cuestionar la presente investigación señalando que nada nuevo se está planteando, pues eso ya se ha mencionado por el propio Instituto Nacional Penitenciario y por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, cabe señalar que en este caso, el aporte y la novedad de la investigación es que se ha descrito la situación laboral y productiva que desarrollan los internos del Establecimiento de San Pedro, a partir de la versión de ellos mismos.

Como resultado del análisis del Informe emitido por el Instituto Nacional Penitenciario el 2014, se puede corroborar que si bien el INPE en el Establecimiento de San Pedro promueve, facilita y permite el desarrollo de talleres denominados como “productivos y laborales”; estos muchas veces resultan insuficientes dado que no cuentan con la logística necesaria y suficiente, además del personal técnico capacitado en habilidades laborales.

3.1.3.3. Informe del Ministerio de Justicia: Del análisis de los resultados de la fuente documental, en el Informe del Ministerio de Justicia (2014) se advierte que las actividades laborales y productivas que realizan los internos, les permite y contribuye a fortalecer su proceso de rehabilitación y hacerlo más óptimo. El Ministerio de Justicia a cargo del Instituto Nacional Penitenciario ha sido testigo de los resultados significativos de los internos cuando estos han desarrollado actividades laborales y productivas. De este análisis se puede concluir que el trabajo ha sido la salvación, recuperación, rehabilitación y resocialización de los internos.

3.1.4. Resultados del análisis de la doctrina

Del análisis doctrinal, se coincide con la postura de Guillamondegui cuando señala que la resocialización requiere de toda una logística, estrategia y análisis interdisciplinario: psicólogos, educadores, técnicos, abogados, médicos, etc., deben intervenir en esta estrategia. Se trata de un proceso integral y requiere una visión holística, comprensiva e incluyente. Todo lo que favorezca la comprensión del interno y el desarrollo de sus capacidades laborales contribuye a su resocialización.

Desde esta investigación se coincide con el maestro argentino Zaffaroni cuando él es claro en señalar que el aislamiento que le produce la cárcel a cualquier persona le impide la conciencia política de la posición facilitando la obra de alienación que el sistema impulsa, tanto para los internos como para los agentes penitenciarios. El aislamiento no es la solución, el aislamiento resulta ser excluyente y por tanto hace sentir al interno ajeno a la realidad y a la sociedad de la cual él, al cometer un ilícito se autoexcluyó. La cárcel no debe seguir siendo el espacio en la que se alberga a los que fuera de ella se les excluyó de oportunidades educativas, económicas, laborales y sociales.

Muñoz, Baratta, García y De Molina han aportado desde la doctrina para la comprensión de lo que implica un proceso de resocialización. En esta investigación se coincide con los aportes de los autores mencionados. El

paradigma de la resocialización debe hacerse patente en un marco jurídico y en una institucionalidad que el Estado debe creer y asumir de modo efectivo.

Desde el análisis sistémico del derecho al trabajo se advierte que el trabajo como derecho ha sido ampliamente desarrollado por la legislación (Constitución Política, Convenios, Tratados, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, Ley General del Trabajo, Código de Ejecución Penal), la doctrina (De la Cuesta, González, López y Arrojo) y las fuentes documentales consultadas (Informe de la Defensoría del Pueblo colombiana y peruana),

La doctrina ha coincidido en señalar que el tratamiento tiene su base en el principio de la modificabilidad del comportamiento humano, ya que si no fuera posible ningún cambio en la conducta del interno, todo intento de tratamiento estaría demás. No obstante que las medidas de tratamiento apuntan hacia un cambio positivo en el recluso, se debe tener en cuenta algunas ideas surgidas dentro de la práctica penitenciaria, en el sentido de que el tratamiento no debe ser considerado como una medida obligatoria o coercitiva, entendiéndose la alternativa de que esté sujeta a la aceptación o no por parte del interno. Ya que como señala Bueno, esta alternativa es lógica “si se recuerda que el tratamiento no corresponde a la finalidad retributiva de la pena, y que no hay tratamiento médico, educativo o psicológico que pueda tener éxito sin la voluntaria cooperación del interesado”.

3.1.5. Resultados del análisis de la técnica de las entrevistas a expertos

En esta investigación se creyó conveniente aplicar la técnica de la entrevista utilizada a distintos especialistas y funcionarios del INPE con amplia experiencia en la institución, los cuales tienen distintos modos de pensar y plantear el objeto de la investigación. Se ha querido tener la visión de cada uno para luego comparar, contrastar y discutir dichas posiciones de tal modo

que la investigación tenga un enfoque amplia, integral y comprensivo respecto al derecho al trabajo de los internos.

Luego de los permisos y autorizaciones respectivas la investigadora acudió al local del Establecimiento Penitenciario de San Pedro para obtener de modo directo información de los propios funcionarios. Es por ello que se aplicó la técnica de la entrevista, cuyos entrevistados fueron los siguientes:

Tabla 5: Ficha Técnica de la entrevista

Entrevistado	Descripción
Edwin Ganello Talledo Matzza	Profesión: abogado Institución: Instituto Nacional Penitenciario – INPE. 17 años laborando en el INPE
Miguel Augusto Sánchez Vela	Cargo: administrador Institución: Instituto Nacional Penitenciario – INPE. 21años laborando en el INPE
Carlos Peña Cárdenas	Cargo: Técnico. Institución: Instituto Nacional Penitenciario – INPE. 6 años laborando en el INPE
Óscar Augusto Vera Salas	Cargo: abogado. Institución: Instituto Nacional Penitenciario – INPE. 30 años laborando en el INPE
Raúl Inga Gary	Cargo: abogado. Institución: Instituto Nacional Penitenciario – INPE

A continuación se consignaran los datos obtenidos de la técnica de entrevista tomando en cuenta los objetivos propuestos en la presente investigación, en

ese sentido se ordenará en principio a aquellos que estén vinculados a los objetivos de investigación y analizados por bloques temáticos.

Objetivo General: Determinar la manera en que el trabajo aporta en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro

Aporte del Derecho al trabajo en el proceso de resocialización de los internos del Establecimiento Penitenciario San Pedro

Según Talledo el INPE acoge al interno y trabaja en devolverlo útil a la sociedad y una de las herramientas son las que nos ofrece el derecho y el tratamiento basados en parámetros legales. Para Sánchez, aporta con los beneficios penitenciarios (trabajo, educación, psicológico, social y legal).

Peña señala que aporta de una manera favorable siempre y cuando el interno lo haga de propia voluntad. De acuerdo a Vera, como profesional del área de tratamiento su labor está complementada con lo dispuesto en el C.E.P de atender a los internos en su proceso de resocialización. Para Inga, esto se cumple por ser parte de una de las variables que señala el C.E.P

Logros significativos en el desarrollo de los procesos de resocialización en el Establecimiento Penitenciario San Pedro

Talledo señala que los programas pilotos que se llevan a cabo y que ahora ya son una realidad (programas CREO – TAS, etc.) Son los que se llevan a cabo. Sánchez reconoce como logro la participación del interno primarios en su resocialización. La participación en talleres tanto en trabajo y educación (carpintería, mecánica, cerámicas, costura y otros).

Peña manifiesta que en cuanto a la cocina han salido buenos chef, reconocidos panaderos. Vera señala que su mayor logro es contribuir en su tratamiento penitenciario para su resocialización. Inga calcula que un 30% aproximadamente de los internos se han rehabilitados.

Respecto al Objetivo específico 1: Analizar la manera en que la legislación nacional reconocen y promueve el derecho a la organización y participación de los internos.

Derecho y legislación sobre la organización y participación de los internos

Talledo sostiene que todo interno tiene derecho a trabajar en los diferentes programas de tratamiento que ofrece el sistema penitenciario derecho al trabajo y estudio contemplada en la legislación.

Según Sánchez, con beneficios de semi libertad y libertad condicional, dependiendo el delito cometido. Por otro lado Peña indica que la legislación nacional si promueve a que los internos se organicen y participen en cuanto a las labores que desean lograr. Vera indica que la legislación el C.E.P artículo 456 establece que el interno se organice y participe en diferentes actividades. Inga indica que el Código de Ejecución Penal en uno de sus artículos apoya y reconoce el derecho a organizarse.

Tabla 6: Limitaciones y dificultades en el ejercicio del derecho al trabajo, la organización y participación

Entrevistado	Limitaciones y dificultades
Talledo	Muchas veces la infraestructura, los profesionales e internos no cuentan con las comodidades para llevar a cabo diferentes programas y eso hace que a veces no sea bien motivada
Sánchez	No tienen ambientes adecuados. No tienen la suficiente cantidad de profesionales tanto en el área de psicología, social, legal, educación y trabajo.
Peña	No tienen ninguna limitaciones ya que se les brinda las facilidades necesarias
Vera	El trámite es engorroso y es difícil para que se viabilice con celeridad para su organización en su población
Inga	El trámite es demasiado engorroso

Derecho a la participación y organización en el Instituto Nacional Penitenciario

Talledo señala que pese a las dificultades de infraestructura se logra llevar a cabo las acciones de tratamiento gracias a profesionales comprometidos. Sánchez manifiesta que el INPE cumple primeramente dándole un ambiente adecuado para su permanencia, alimentación, salud y otros.

Mientras que Peña indica que se les ofrece las facilidades del caso para cada interno con respecto a lo que deseen ejercer cualquier taller. Según Vera, el INPE lo cumple con capacitaciones y avances en organización de cada área que corresponde su tratamiento tiene que haber una adecuada administración para su tratamiento, participación y organización del interno.

Según Inga, esto se cumple aceptando las solicitudes presentados por los internos.

Objetivo específico 2: Determinar la incidencia de la normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro.

Normativa y Programas del Instituto Nacional Penitenciario del Perú y derecho al trabajo

Talledo señala que en el INPE se promueve el trabajo al igual que el estudio como arma re socializadora. Los resultados son que hoy en día hay empresas privadas que aportan también por brindar oportunidad de trabajo intramuros a internos.

Sánchez indica que el INPE promueve mediante con talleres tanto laborales en forma manual (carpintería, cerámica, mecánica, construcción y cocina). Peña señala que se han obtenido buenos resultados ya que como se mencionó, chef panaderos etc. y ya se encuentran trabando fuera del penal. Según vera, mediante el área de trabajo es el órgano encargado que tiene cada penal para su organización. Inga manifiesta que han obtenido resultados favorables a través del área laboral.

Normativa y Programas del Instituto Nacional Penitenciario y derecho a la organización y participación

Según Talledo, existen cronogramas de trabajo y acciones de tratamiento plasmados para todo el año, se llevan a cabo pese a las dificultades y carencias. Sánchez, indica que se realizan talleres de trabajo, educación primaria, promueve el deporte y talleres de trabajo especializados. Vera señala que esto se cumple emitiendo disposiciones para su ejecución. Según Inga, se aplica lo dispuesto por el C.E.P.

Tabla 7: Recomendaciones de los entrevistados

Entrevistados	Recomendaciones
Talledo	Que el Estado corrija y mejore el presupuesto para el INPE para la realización de su labor re socializadora, no debe existir excusas. El Estado debe preocuparse más por la institución como el INPE. No es el INPE solo guardianes de presos, son gente que trabaja en resocialización de personas
Sánchez	Tener ambientes adecuados, máquinas para realizar trabajo para la implementación de talleres y tener mayor cantidad de profesionales en las distintas especialidades
Peña	Solicita más presupuestos para que haya más talleres y estén bien implementados y así los internos puedan participar con más ganas
Vera	Realizando supervisiones a todos los programas
Inga	Incrementar el personal especializando y desarrollando cursos así como capacitación permanente del personal del INPE

3.1.6. Resultados del análisis de la técnica de la encuesta

Luego de los permisos y autorizaciones respectivas la investigadora acudió al local del Establecimiento Penitenciario de San Pedro para obtener de modo directo información de los propios internos. Es por ello que se aplicó la técnica de la encuesta.

Cabe precisar que esta encuesta recoge tan solo un muestreo de la percepción, sentir y modo de pensar de los internos del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, en relación a la investigación. No recoge cifras estadísticas ni nos permitirá medir algún dato pues nuestra investigación es de enfoque cualitativo y

no cuantitativo. Es por ello que se ha tenido cuidado en recabar datos e información solo cualitativa, es decir, opiniones, percepciones y modos de pensar.

Tabla 8: Ficha Técnica de la encuesta

Dato	Descripción
Población total encuestada	50 internos
Delitos cometidos	Actos contra el pudor, robo agravado, falsificación de documentos, hurto agravado, fabricación ilegal, receptación, contra la administración pública violencia y resistencia a la autoridad, omisión de asistencia. El 70% de los encuestados cometió delito de robo agravado
Varones	50 encuestados
Ocupación laboral dentro del EP. San Pedro	Carpintería, zapatería, textilería, cerámica, cocina, construcción
Edades	Entre 23 y 45 años
Años de permanencia en el EP. San Pedro	Entre 1 a 10 años
Grado de instrucción	Desde nivel Primaria hasta Superior completa
Lugar y fecha de encuesta: Local del E.P. San Pedro, San Juan de Lurigancho, el día 30 de junio de 2017	

Los internos encuestados, en algunos casos no quisieron colaborar brindando la información por temor, desconfianza o desinterés. Sin embargo, con la información recabada la encuesta ha permitido también cumplir con los objetivos de la investigación y por tanto aportar en la demostración de los Supuestos Jurídicos planteados. A continuación se precisan los resultados de la encuesta de modo porcentual de acuerdo a cada pregunta planteada, luego del cual se hará el análisis respectivo:

A continuación se consignara la información obtenida de la técnica de la encuesta en relación al Objetivo General: Determinar de qué manera el

trabajo aporta en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro.

Análisis de las encuestas a partir del Objetivo General:

Los encuestados manifestaron de modo unánime de que el trabajo aporta de modo decisivo no solo en su proceso de resocialización, sino que además les permite a ellos estar ocupados, sentirse útiles, les ayuda en su autoestima y a mantener relaciones interpersonales de modo adecuado. Asimismo señalaron que a través de los distintos talleres implementados por el INPE o por ellos mismos han aprendido diversas habilidades, técnicas y conocimientos para producir distintos productos, los mismos que venden y les permite obtener recursos económicos.

Objetivo Específico N° 1: Analizar de qué manera la legislación nacional reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos.

Análisis de la encuesta a partir del Objetivo Específico 1:

Los encuestados señalaron que la legislación es desconocida tanto por ello como por el personal del INPE, lo cual dificulta y les limita en el ejercicio de sus derechos. Indicaron que resulta importante conocer y aprender sobre legislación para defenderse mejor ante los abusos que pueda cometer el personal del INPE. Manifestaron que si bien la legislación les favorece, esto resulta ineficaz toda vez que el INPE omite en cumplirla y por el lado de ellos, al desconocerla les limita para exigir a las autoridades que la cumpla.

Objetivo Específico N° 2 Determinar la incidencia de la normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro.

Se formularon las siguientes preguntas:

Interpretación de la encuesta a partir del Objetivo Específico 2

Los encuestados señalaron que la legislación tiene poca incidencia en el cumplimiento de su derecho al trabajo, a la organización y participación, pero no porque la legislación esté mal dada, sino que el INPE no asume su compromiso de respetarla y cumplirla. Al observar pocos programas laborales promovidos por el INPE les lleva a pensar que el INPE no está comprometido con su resocialización. Para los internos, el INPE aun los sigue asumiendo como una carga. Además manifestaron que el INPE no cuenta con los profesionales competentes y adecuados para su tratamiento. Todos señalaron que el INPE debe implementar programas y actividades que promuevan el derecho al trabajo, la organización y la participación. Finalmente aseguraron que de salir en libertad seguirán trabajando en las habilidades laborales aprendidas dentro del penal.

3.1.7. Resultados del análisis de la técnica de la observación

La investigadora a la par de realizar las entrevistas a los funcionarios del Establecimiento Penitenciario de San Pedro y las encuestas a los internos, anteriormente descritas y analizadas, también aplicó la técnica de la observación, la que tuvo como objetivo contrastar datos e información en el lugar de los hechos.

Desde la técnica de observación aplicada cabe señalar que la actividad laboral penitenciaria desarrollada por los internos del Establecimiento de San Pedro, en diversa medida, incide en la modificación del comportamiento de los internos. En un primer caso dándole una capacitación laboral que no tenía. En un segundo caso promoviendo o propiciando una actitud positiva del recluso hacia el trabajo escogido adecuadamente, porque en muchos de ellos no existe una actitud favorable por esta actividad. En otros casos también se pueden lograr que vivan o sientan algún grado de realización o satisfacción la producir algo mediante el esfuerzo del trabajo propio. Este

proceso laboral sistematizado evidentemente que puede lograr cambios positivos en el interno, a condición de que el trabajo asignado sea congruente con sus habilidades y/o intereses.

Los principios científicos que rigen el tratamiento penitenciario establecen que debe ser individualizado y grupal, utilizando para ello toda clase de métodos médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, sociales y laborales, en una relación abierta. Sin embargo esto no se aplica en el Establecimiento Penitenciario de San Pedro, según lo que observamos en el trabajo de campo realizado en sus instalaciones.

En el Perú, en los últimos años, en materia de infraestructura penitenciarias ha priorizado el criterio de seguridad en perjuicio de las aéreas destinadas al trabajo. A nivel de infraestructura penitenciaria diseñada para el trabajo, se ha producido una importante mejora, pues los nuevos penales construidos y la ampliación de otros en el periodo 2006 - 2011, han comprendido en su diseño arquitectónico amplias aéreas de trabajo, las mismas que han sido inadecuadamente implementadas.

Así, con relativa frecuencia el centro penitenciario San Pedro, uno de los principales penales del Perú, viene siendo objeto de críticas. Una de ellas incide, de manera aislada o conjunta, sobre los niveles de corrupción, la vulneración de los derechos laborales de los internos, el acceso a los programas de trabajo y educación, la inseguridad de sus instalaciones y los problemas de alimentación *entre muros*. Sin duda, dichos temas son delicados y trascendentes.

No obstante, subsisten aún serios problemas de infraestructura debido a que un importante sector de establecimientos penitenciarios construidos en la década de los noventa, no contemplaron en su planificación áreas de trabajo (se privilegió la seguridad antes que el tratamiento), obligando hasta la fecha, que se improvisen talleres, en espacios que no siempre guardan las condiciones de habitabilidad y seguridad requeridas.

IV. DISCUSIÓN

IV. DISCUSIÓN

En esta parte final de la investigación se contrastan los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos en la investigación a partir de las fuentes consultadas: legislación, doctrina, posición de expertos y encuestas. En esta parte se organizará y describirá las discusiones de los resultados, en base a los Supuestos de investigación.

Discusión sobre el Supuesto General: El trabajo aporta de modo significativo en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro ya que adquieren capacidades y habilidades laborales que le permiten obtener recursos económicos y mejorar su calidad de vida

Como resultado del análisis de la legislación, es interesante lo que señala el Código de Ejecución Penal (CEP) en el sentido de que se fomentará que el interno participe en la planificación de su tratamiento (Art. 62), recogiendo en parte lo señalado también en el artículo 61 de la Ley General Penitenciaria Española de 1979. Mediante este procedimiento participatorio en la planificación del tratamiento obviamente que se espera un compromiso mayor del recluso con este proceso. Sin embargo no podemos dejar de señalar que el tratamiento es cuestionado, con argumentos válidos en determinados casos, cuyo análisis se ha expuesto anteriormente.

La doctrina, los entrevistados y los encuestados convergen en señalar que otro aspecto característico del tratamiento penitenciario es que debe ser desarrollado en sentido individualizado y en forma progresiva (Art. 63 Código de Ejecución Penal) sobre el particular consideramos que no es necesario mayor comentario, porque es prácticamente un principio rector del penitenciarismo el considerar que la acción del tratamiento se debe desenvolver en forma particularizada y conforme a las características personales de cada interno, determinado por el diagnostico criminológico. A

su vez todo tratamiento como proceso individualizado tiene que desenvolverse en forma progresiva, como los ajustes y reajustes que recomienden las peculiaridades del caso personal. Esto significa que puede darse una progresión o a veces regresión en el proceso de tratamiento del interno, lo que debe ser objeto de determinación por el equipo técnico de tratamiento (Artículo 69 del Código de Ejecución Penal).

Para la doctrina analizada y los expertos entrevistados resultan de vital importancia explicar en el desarrollo del presente trabajo las distintas variables de identificación penitenciaria, relativas al cumplimiento del DS. 003-96-JUS, y comprobar que, aun cuando éste régimen ha introducido importantes mejoras, las condiciones del Penal San Pedro violentan diversas reglas del tratamiento a los detenidos establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos (Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos); asimismo, se violentan normas de la propia Constitución Política del Perú de 1993 y del Código de Ejecución Penal.

Desde los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas aplicadas, de esta investigación se considera que, como toda institución del sistema penal, merece ser analizada no sólo por la especialidad de su estructura normativa, sino también por sus consecuencias reales; en esencia, porque se trata de los derechos de quienes se encuentran internos en un establecimiento penitenciario, por lo que se debe reeducar, rehabilitar y re socializar al interno para evitar la reincidencia de la comisión de un nuevo delito y así pueda ser aceptado ante la sociedad como un nuevo individuo con las mismas condiciones y oportunidades.

Sin embargo, la idea de resocialización, como la de tratamiento, es radicalmente ajena a los postulados y dogmas del Derecho Penal clásico, que profesa un retribucionismo incompatible con aquella. Y su legitimidad (la del ideal re socializador) se cuestiona desde las más diversas orientaciones científicas progresistas o pseudoprogresistas: la llamada criminología crítica,

determinados sectores de la Psicología y del Psicoanálisis, ciertas corrientes funcionalistas, interaccionistas, etc. Algunos, afirman que la resocialización del delincuente es mera utopía, un mito, un engaño; o, simplemente, una declaración ideológica, propugnando entonces, como única alternativa válida, la lucha contra las estructuras sociales, la radical no intervención del Derecho Penal o su utópica supresión.

Discusión sobre Supuesto Específico 1: La legislación nacional de modo explícito reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos, lo cual se constituye en exigible para que el INPE cumpla con dicha normativa.

Como resultado de lo analizado en la legislación, se han planteado y argumentado que no nos podemos quedar en el diagnóstico ni en el problema, sino que se debe dar paso a la solución o mejor dicho a las soluciones. Esa solución pasa en primer lugar por cambiar el paradigma de las cárceles. Las cárceles deben dejar de ser pensadas como una carga para el Estado y la sociedad y deben ser asumidas bajo el paradigma de Centros de producción y desarrollo de capacidades, en la que todos salen beneficiados: el Estado (pues recupera a un interno y evita que reincida en el delito), la sociedad (que tendrá u delincuente menos y mayor seguridad ciudadana) y el propio interno (que al desarrollar habilidades laborales tendrá mejores condiciones para trabajar y generar sus propias oportunidades de trabajo).

Como resultado del análisis de la doctrina y de las entrevistas y encuestas realizadas, desde la perspectiva del trabajo penitenciario como medio de tratamiento, particularmente creemos en forma fundamental, al margen que pueda hacerse efectivo como un derecho y/u obligación, que el trabajo penitenciario constituye una forma de tratamiento, con diverso grado de importancia en función de las características personales o habilidades del recluso.

En ese contexto cobra vigencia la idea de que ningún régimen penitenciario mejorará por la sola optimización de la infraestructura de sus cárceles. Contrariamente, sólo se podrá hablar de una evolución del sistema penitenciario si su discurso y praxis se adecuan a las orientaciones de las normas existentes, nacionales e internacionales, sobre condiciones carcelarias compatibles con el respeto de los derechos humanos de las personas en prisión. Esta discusión encuentra su respaldo en los resultados del análisis de la doctrina, legislación, observación y encuesta aplicada.

Discusión sobre Supuesto Específico 2: La normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro tienen una incidencia e impacto poco significativo debido a que no cuentan con la logística, personal e infraestructura necesaria para ello.

Desde esta investigación y considerando los resultados del análisis de la legislación, se considera que el artículo 79 del Código Penal, está mal redactado porque se refiere al “producto del trabajo”, lo que no recibe y debe recibir el condenado. Lo que el condenado recibe, de conformidad con el artículo anterior, es una remuneración según el valor de su trabajo, esta remuneración tiene que distribuirse de acuerdo a la pauta establecida en este Artículo.

De ahí, que la presente investigación pretendió motivar la reflexión sobre la realidad del régimen penitenciario del Penal San Pedro en el marco del Código de Ejecución Penal y Reglamento Decreto Supremo Nº 003-96-JUS (Régimen de Vida y Progresividad del Tratamiento para Internos de Difícil Readaptación, Procesados y/o Sentenciados, por Delitos Comunes a nivel Nacional), a partir de testimonios concretos de la vida en la cárcel que nos sugieren la idea de que el derecho al trabajo de los internos en prisión se encuentra desprotegido. Esta aprehensión de la realidad penitenciaria es en

sí complicada, coinciden los expertos entrevistados. En realidad, para nosotros resulta difícil explicarla; para los internos, es duro comprenderla; pero para sus operadores (INPE, Ministerio de Justicia, Policía Nacional) sin duda, resulta imposible justificarla.

Tanto desde la doctrina nacional como internacional se ha planteado la discusión de que el tratamiento penitenciario debe adaptarse a la persona del interno, a la condición social, ocupación, nivel cultural y otras que son importantes elementos de la personalidad, porque si este tratamiento es uniforme para todas las categorías, es nocivo y para muchos aflictivo

Por lo que se busca orientar las acciones de tratamiento penitenciario de manera flexible, que no implica el cumplimiento obligatorio de periodos en las cuales, las facilidades para la rehabilitación con que cuenta la institución penitenciaria debe dirigirse en forma eficaz hacia la solución de los problemas de los internos.

V. CONCLUSIONES

V. CONCLUSIONES

PRIMERA: La investigación ha demostrado que el trabajo que realizan los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro aporta de modo significativo en su proceso de resocialización de ya que han adquirido capacidades y habilidades socio-laborales que le permiten obtener recursos económicos y mejorar su calidad de vida

SEGUNDA: El Establecimiento Penitenciario de San Pedro a cargo del Instituto Nacional Penitenciario incumple con la legislación nacional que reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos. Ello debido a una política penitenciaria que implique dotar de presupuesto, personal, logística e infraestructura adecuada no solo para cumplir con la legislación, sino además para cumplir con los fines de la pena, entre ellas, la resocialización.

TERCERA: Aun con las limitaciones de presupuesto, personal e infraestructura el Establecimiento de San Pedro a cargo del Instituto Nacional Penitenciario desarrolla programas y actividades que promueven el derecho al trabajo de los internos pero que estos tienen una incidencia e impacto poco significativo, lo cual limita no solo el ejercicio del derecho al trabajo sino además su proceso de resocialización.

VI. RECOMENDACIONES

VI. RECOMENDACIONES

PRIMERA: El Ministerio de Justicia a cargo del Establecimiento Penitenciario de San Pedro deberá aprobar una política institucional de desarrollo laboral que convierta a los centros penitenciarios en espacios de producción y desarrollo económico y laboral, de tal modo de cambiar el paradigma del interno como una carga y asumirlo como un sujeto de derechos, capaz, protagonista y primer responsable de su resocialización.

SEGUNDA: El Instituto Nacional Penitenciario deberá implementar una política institucional de difusión y aplicación de la legislación nacional en particular el que reconoce y promueve el derecho al trabajo, la organización y participación de los internos. De ese modo el Estado peruano cumplirá con los estándares internacionales a las que está obligado a cumplir sobre tratamiento penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario deberá asumir plenamente que la resocialización sí es posible siempre que haya decisión política e institucional sostenible y con el respaldo presupuestario suficiente. Para ello el Instituto Nacional Penitenciario deberá coordinar acciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, de la Producción, de Trabajo y de Poblaciones vulnerables a fin de aunar esfuerzos para desarrollar de modo estratégico e interinstitucional políticas laborales a favor del trabajo, la producción, la organización y la participación de los internos, la cual redundaría en su proceso de resocialización.

TERCERA: El Instituto Nacional Penitenciario a cargo del Establecimiento de San Pedro, deberá implementar un programa de formación, capacitación y desarrollo de capacidades al personal a cargo del área de trabajo y producción a fin de que aplique a los internos un tratamiento más efectivo, afectivo y adecuado que permita obtener resultados favorables, como de algún modo ya lo obtienen a pesar de los ingentes recursos con los que cuenta.

VII. REFERENCIAS

Bibliografía temática

Baratta, A. (1991). *¿Resocialización o control social? El sistema penitenciario entre el temor y la esperanza*. México: Orlando Cárdenas, editor.

Borja, C. (s.f.). *Principios Fundamentales de Derecho Penitenciario Español*

Cabanellas, G. (s.f.). *Diccionario Jurídico Enciclopédico*. Heliasta

Castro, J. (2009). *Realidad penitenciaria y derechos humanos: Penal de Lurigancho (Perú)*.

Carvajal, C., Rojas, R. Fundación universitaria de San Gil-Unisangil, San Gil, Colombia.

Clemer (1958). *La prisión comunitaria*. 2º edición. Alemania.

Código de Ejecución Penal y Reglamento de Ejecución Penal.

Constitución Política del Perú 1993

Contreras López M. E., visión retrospectiva del discurso penitenciario en México.

Córdoba, R (1978). *La pena y sus fines en la Constitución española de 1978*. Reglamento Penitenciario de España.

De La Cuesta, J. (2014). El trabajo de los internos en el derecho penitenciario Español. Madrid.

Defensoría del Pueblo de Colombia. Contenido y alcance del derecho individual al trabajo-Marco para la evaluación de la política Pública del derecho al trabajo desde una perspectiva de derechos humanos. Colombia.

El Peruano – Normas Legales: Ministerio de Justicia – Instituto Nacional Penitenciario; diseño de políticas penitenciarias.

González, J. (2000). Situación penitenciaria y pena privativa de la libertad. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Guillamondegui, R, (2010). Resocialización y Semilibertad. Análisis legal, jurisprudencial y criminológico. Buenos Aires.

Instituto Nacional Penitenciario publica el Plan estratégico Institucional para el periodo 2012-2016

Kurczyn, P. (2014). Las condiciones del trabajo carcelario. México.

Meza, L. (2016). El trabajo penitenciario en el Perú la aplicación del trabajo como actividad obligatoria en la ejecución de la pena privativa de la libertad. Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Derecho con Mención en Derecho Penal ante la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

Ministerio de Justicia- Instituto Nacional Penitenciario (2008). Manual de derechos humanos aplicados a la función penitenciaria. Lima.

Muñoz, M. (1979). *La resocialización del delincuente. Análisis y crítica de un mito*. En CPC. N° 7.

Peñas, L. (1996). *Resocialización: Un problema de todos*. Murcia.

Pérez, J. (1994). *Una etnografía del penal de Lurigancho*. Lima: CINTE.

Rusche y Kirchheimer (1984). *Pena y estructura social*. Traducción de García Méndez. Bogotá.

Solís Espinoza, A. (1991). *Política Penitenciaria y Resocialización, en derecho penal, Homenaje al Dr. Raúl Peña*. Lima: Ediciones Jurídicas.

Tarradillos, J., y Solís Espinoza, A. (1991). *Política Penitenciaria y Resocialización, en derecho penal*. Lima: Ediciones Jurídicas.

Zaffanori, E. (1986). *La doctrina de la teoría de la cárcel útil*. Argentina

Referencias Metodológicas

- Aguilar, C. (2011). *La investigación jurídica*. Lima Perú. Editorial A.F.A editores importadores S.A
- Alfaro, C. (2012). *Metodología de Investigación Científica aplicado a la Ingeniería*. Lima: UNAC
- Arias, F., (2012). *Proyecto de Investigación*. (6ª ed.). Caracas – República Bolivariana de Venezuela: Episteme C.A.
- Ávila, B.(2006) *Introducción a la metodología de la investigación*. México. Edición electrónica. Recuperado de: www.eumed.net/libros/2006c/203/
- Balestri, M. (2002). *Como se elabora un Proyecto de investigación*. (6ª ed.). Venezuela: Consultores.
- Real. (1ª ed.). Lima- Perú. Biblioteca de la Universidad Villa Real.
- Díaz, V. (2009). *Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística*. (2ª ed.) Editorial Masters RIL. Santiago – Chile.
- Dieterich H. (2001). *Nueva guía para la investigación científica*. (10ª. Ed.). México: Ariel.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., (2010). *Metodología de la Investigación Científica*. (5ª ed.). México: Interamericana editores S.A.
- Hernández, S. Fernández, C. Baptista, L. (2010). *Metodología de la investigación*. (Quinta edición). México: Mc Graw Hill.
- Horacio, S. (S.F.) *Tesis De Grado. Metodología de la Investigación*.
- Hurtado B., Jacqueline (2000). *Metodología de la Investigación Holística*. Venezuela: SYPAL-IUTC.
- Ponce de León, L. (2011). *La metodología de la investigación científica del derecho*. México: Porrúa.

Quintana, A. (2006). Metodología de la investigación Cualitativa. Revista de Psicología: Tópicos de actualidad.

Quintana, A. y Montgomery, W. (2006). Metodología de Investigación Científica Cualitativa. Lima: UNMSM.

Quintana, L. (2007). *Métodos y técnicas de investigación I*. México: McGraw Hill.

Ramos N., C. (2007). *Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento*. (4° Ed.). Lima: Gaceta Jurídica.

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Carmen Gisela Paredes Estela

FACULTAD/ESCUELA: DERECHO

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	Derecho al trabajo y resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro. 2016-2017
PROBLEMA GENERAL	¿De qué manera el derecho al trabajo aporta en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro?
PROBLEMAS ESPECIFICOS	<p>Problema Específico 1</p> <p>¿De qué manera la legislación nacional reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos?</p> <p>Problema Específico 2</p> <p>¿Cuál es la incidencia de la normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro?</p>
SUPUESTO GENERAL	El trabajo aporta de modo significativo en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro ya que adquieren capacidades y habilidades laborales que le permiten obtener recursos económicos y mejorar su

	calidad de vida
SUPUESTOS ESPECIFICOS	<p>Supuesto Específico 1</p> <p>La legislación nacional de modo explícito reconoce y promueve el derecho a la organización y participación de los internos, lo cual se constituye en exigible para que el INPE cumpla con dicha normativa.</p> <p>Supuesto Específico 2</p> <p>La normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro tienen una incidencia e impacto poco significativo debido a que no cuentan con la logística, personal e infraestructura necesaria para ello.</p>
OBJETIVO GENERAL	Determinar la manera en que el trabajo aporta en el proceso de resocialización de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro
OBJETIVOS	<p>Objetivo específico 1</p> <p>Analizar la manera en que la legislación nacional reconocen y promueve el derecho a la organización y participación de los internos</p>

ESPECÍFICOS	<p>Objetivo específico 2</p> <p>Determinar la incidencia de la normativa y programas que desarrolla el Instituto Nacional Penitenciario en relación al derecho al trabajo de los internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro</p>
DISEÑO DEL ESTUDIO	El diseño de este trabajo de investigación es fenomenológico. Enfoque Cualitativo
POBLACIÓN ESCENARIO DE ESTUDIO	Internos del Pabellón B del Establecimiento Penitenciario de San Pedro, personal del INPE, expertos.

Categorización

Categorías	Sub categorías
Resocialización	Interno, cambio de conducta, labores productivas, disminución de la violencia, adaptación social
Derecho al trabajo	Productos, talleres, ventas, ganancias económicas, inversión